

# Debates y conflictividades

---

## Desafíos para el desarrollo de la soberanía alimentaria en el norte argentino.

### Las experiencias de las comunidades campesinas indígenas

*Julia Colla\**

La temática en este encuentro, como en los demás, tiene como eje central la soberanía alimentaria. Es decir, en términos generales, la capacidad y posibilidad que tienen los pueblos para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible. En relación a esto, la pregunta que nos convoca es cómo lograrlo en nuestro país, donde el avance y desarrollo del agronegocio vuelve muy difícil la producción de alimentos saludables y el desarrollo sustentable.

En esta intervención vengo a compartirles algunas reflexiones en torno a los desafíos que tienen las poblaciones de campesinos e indígenas en la provincia de Chaco para poder definir qué producir y cómo hacerlo. Sobre todo en contextos en los que el avance del actual régimen productivo hegemónico ha vuelto insostenible las posibilidades de permanencia de este sector en el ámbito rural. Por lo tanto, mi interés no es focalizarme en aspectos productivos, sino plantear en qué condiciones se encuentran las poblaciones rurales con las que trabajamos desde los movimientos sociales y las posibilidades concretas de avanzar hacia la soberanía alimentaria.

Para comenzar considero necesario plantear brevemente algunas cuestiones sobre el modelo de agronegocio vigente y lo que ha sucedido, al menos en los últimos años, en zonas extrapampeanas como la provincia de Chaco. En especial me interesa detenerme en sus consecuencias sociales y productivas.

En términos generales, el régimen de producción en los últimos veinte años consistió en inversiones para la producción a gran escala de *commodities* (principalmente soja, maíz, trigo y ganadería) con fines de exportación y la intensificación de proyectos extractivistas vinculados a la actividad forestal. Esto se tradujo en el avance de la frontera agrícola pampeana hacia áreas históricamente periféricas, una mayor concentración de la tierra, deforestación y la aparición de nuevos actores sociales relacionados con el capital financiero. En Chaco este proceso estuvo acompañado por la desarticulación de la economía agrícola regional vinculada a la producción de algodón, la cual se caracterizaba por una fuerte presencia del Estado (en la regulación de la comercialización, entrega de insumos, etc.) y la coexistencia de diferentes formas de usufructo de la tierra por parte de distintos sujetos. Entre ellos, cientos de campesinos indígenas que producían algodón o trabajaban temporalmente en la carpida y cosecha.

A escala territorial, estas transformaciones y avance de fronteras sucedieron sobre espacios que históricamente pertenecieron a campesinos y pueblos originarios, incluso con el reconocimiento legal sobre sus tierras. Esto generó a nivel social situaciones de despojo y “arriconamiento”. Es decir, la expulsión (muchas veces violenta) de las familias de sus tierras, su reubicación en suelos marginales y erosionados, con escasez de agua para consumo humano, en espacios alejados de escuelas, centros urbanos, etc. y, en ocasiones, con hacinamiento productivo en relación a la extensión de las parcelas por familia y las posibilidades de producción agrícola u hortícola.

A modo de ejemplo, en la localidad de Pampa del Indio, al norte de la provincia, todas estas transformaciones pueden graficarse en el espacio rural de una manera bastante explícita. En un paraje rural existe un alambrado que divide un predio de 40 mil hectáreas pertenecientes al empresario y terrateniente Eduardo Eurnekian en donde se realizan cultivos mixtos (principalmente soja y trigo)

junto con ganadería. Del otro lado, se encuentra la comunidad de campesinos indígenas de Campo Medina, con familias hacinadas en parcelas de 25 hectáreas, con graves condiciones de vida, principalmente por la situación habitacional y de salud. Previa a la instalación de la empresa, en aquel espacio la comunidad realizaba sus actividades de caza, recolección, pesca e incluso rituales, ya que allí se ubica un cementerio indígena actualmente destruido y cercado.

A su vez, en el año 2007 la comunidad logró una medida cautelar para que la empresa deje de fumigar con glifosato sobre las viviendas y la escuela primaria allí emplazada. Esto sucedió luego de la existencia de casos de nacimientos con malformaciones y de la muerte de obreros rurales que trabajaban en el predio de la empresa. Además, un estudio sobre el agua realizado por la Universidad de Buenos Aires había detectado arsénico, glifosato y metales pesados en los tanques y aljibes de almacenamiento. Incluso, muchas familias recolectaban agua en tarros del herbicida Randup, totalmente prohibidos para tal uso.

Por nuestra parte, en el año 2014 realizamos un trabajo de relevamiento junto con la Federación Nacional Campesina, que es un movimiento social que agrupa varias organizaciones locales y en Pampa del Indio llega a aglutinar a unas 2000 personas. El objetivo era evaluar la posibilidad de realizar proyectos productivos, para lo cual era necesario conocer las condiciones de las chacras. En 1800 hectáreas relevadas había 1400 pobladores. Es decir, la densidad demográfica era de 1,2 hectáreas por habitante. Esto se reducía mucho más en algunas zonas donde el núcleo familiar tenía unas 5 hectáreas pero con familias extendidas viviendo dentro del mismo predio (por el mismo proceso de arrinconamiento mencionado anteriormente). Por lo tanto, esta disposición de familias campesinas “sin tierras” imposibilitaba llevar adelante un proyecto productivo algodonero, por ejemplo. A estos datos se suma que el 64% de las familias vivía en condiciones de hacinamiento en viviendas de adobe, con un porcentaje muy alto de enfermedad de Chagas y Tuberculosis (TBC). Por último, el 89% de la población tenía como principal ingreso, y a veces el único, la Asignación Universal por Hijo.

Frente a este panorama tan abrumador, nos preguntamos: ¿cuáles son las opciones que tienen estas familias de elegir qué alimentos consumir y en qué

condiciones producir? Es necesario que nos cuestionemos sobre este tema porque esta es la situación de gran parte de las poblaciones pobres rurales en Argentina y quienes con mayor urgencia necesitan producir alimentos sanos y sustentables.

Estos datos que hemos expuesto son muestra de que el modelo vigente ha llevado a una crisis humanitaria a las comunidades campesinas e indígenas, quienes en la actualidad tienen limitaciones estructurales para poder producir y tener una calidad de vida digna. Ahora bien, la acción de los movimientos sociales es clave para hacer frente a esta situación. La Federación Nacional Campesina (FNC), por caso, despliega todo tipo de acciones colectivas para demandar el acceso a la tierra, la producción agrícola y hortícola, la construcción de viviendas, entre otras. En estas instancias aparece un elemento muy importante en la lucha política: lo colectivo. La necesidad de reunirse, debatir y reflexionar sobre las posibilidades de articular proyectos en conjunto. Para los indígenas Qom en Pampa del Indio, estas actitudes y lógicas comunitarias no son ajenas, más bien son parte intrínseca de sus manifestaciones culturales. Los lazos de reciprocidad, el compartir, dar y recibir son prácticas culturales abigarradas que tienen un rol muy importante al momento de pensar proyectos agrícolas que impliquen el cultivo, la producción y la comercialización de alimentos.

De aquí surge la experiencia de los semilleros comunitarios que quería compartirles, ¿por qué comunitarios? Porque este hacinamiento dentro de las parcelas hace imposible pensar en acciones que no sean comunitarias. Los semilleros son prácticas que en la actualidad están en pleno proceso. El principal problema a resolver es la alimentación de las familias que deben ir a trabajar allí, ya que son propuestas que demandan tiempo y energía para poder llevarlas a cabo. Por lo tanto, un primer tema a debatir en las asambleas que se realizan refiere a la organización de las ollas comunitarias para garantizar el almuerzo de quienes trabajan, como así también se atienden cuestiones tales como quiénes van a llevar a los chicos a la escuela, hacer las compras y todo lo que demandan las actividades domésticas. Un segundo punto es definir el espacio donde se realizará el semillero. En las experiencias que relevamos esta decisión se basaba en el “préstamo” de alguna parcela por parte de un productor solidario o las características productivas de algún predio con propiedad comunitaria (bajo legislación indígena),

por ejemplo, el acceso al agua. Por último se organizaban cuadrillas para el cultivo, el posterior cuidado y finalmente la cosecha.

En el semillero comunitario que realizó la FNC en la localidad de Castelli, por ejemplo, también fue clave la participación de técnicos de INTA en el asesoramiento. Como los compromisos en el envío de insumos, que había acordado el movimiento con el gobierno provincial, llegaban a destiempo o eran inadecuados, se articularon otras acciones. Los insumos fueron adquiridos en semilleros agroecológicos pertenecientes a campesinos guaraníes de la provincia de Misiones y el gasoil fue suministrado por convenios directos con el Estado. La cosecha se llevó a cabo de manera manual en agosto del 2017 con cuadrillas de 120 personas provenientes de los distintos parajes rurales –entre ellos, de Pampa del Indio–. Finalmente, se desgranaron y embolsaron 4.500 kilos que fueron distribuidos entre 1.400 integrantes de la FNC para la campaña agrícola 2017-2018. Lo interesante de este ejemplo es la búsqueda de insumos sin manipulación genética, el reemplazo de la maquinaria por tareas manuales de cosecha –incluso de desgrano– y la distribución equitativa de la misma entre los participantes, son actividades que podrían plantearse como pautas “anti-económicas” bajo los estándares convencionales de mercado. Pero para las familias de campesinos e indígenas estas actividades sirvieron para garantizar la próxima campaña agrícola.

Estas experiencias nos permiten hacer algunas reflexiones finales. En primer lugar, el régimen de producción hegemónico actualmente es insustentable en términos sociales y ambientales para gran parte de las poblaciones rurales en el norte argentino. En contrapartida, es la acción política de los movimientos sociales la que permite pensar otras alternativas, organizarse y plantear estos proyectos productivos.

En segundo lugar, es necesario que visibilicemos estas experiencias, a las personas que le ponen el cuerpo para enfrentar las condiciones de pobreza. Son propuestas que permiten ampliar las opciones, brindar otras oportunidades de vida y quedarse, organizarse y luchar en el campo.

La FNC junto a otros movimientos sociales que han surgido en Argentina, han logrado instaurar una agenda política de demandas. En ella existen propuestas para pensar otro modelo productivo que tenga en cuenta el respeto por la diversidad y la heterogeneidad de actores que existen en el campo. En este sentido, es interesante rescatar los estudios que se han hecho en América Latina, como los de Carlos Porto-Gonçalves<sup>1</sup>, geógrafo brasileño que en su momento fue compañero de Chico Mendes del movimiento Seringueiro y actualmente trabaja con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, donde propone unas conceptualizaciones sobre el territorio y su uso social e histórico para poder pensar estas otras lógicas diferentes a las del capital.

La última reflexión que quiero compartirles tiene que ver con la mirada que tiene la academia y el Estado sobre estos otros territorios. En general, hablamos de la expansión de las fronteras agroindustriales, del agronegocio, pero poco se profundiza en pensar qué es lo que hay “del otro lado”. Es decir, ¿quiénes están del otro lado de la frontera?, ¿qué relaciones sociales existen además de las asalariadas? Es importante visibilizar a estas poblaciones y sus prácticas culturales y productivas, sobre todo cuando, producto de nuestras intervenciones, se pueden pensar y diseñar políticas públicas.

En relación a esto, es común hablar de que el Estado lleva “el desarrollo” a las comunidades con proyectos turísticos, programas de trabajo, etc. Pero los pueblos indígenas plantean que, en realidad, se trata de una nueva “Conquista del Desierto”. Es decir, políticas de intervención estatal que no se adecuan a las condiciones territoriales, al uso histórico sobre el espacio, la vinculación que tienen las personas con la naturaleza, las temporalidades y manifestaciones culturales en general. Esta violencia epistémica, como podríamos denominarla a grandes rasgos, conduce a que estas políticas fracasen en sus objetivos. Menciono este tema porque considero necesario que, para plantear la soberanía alimentaria como derecho, no nos quedemos en cuestiones técnicas a resolver sino que nos cuestionemos con quiénes trabajamos y cómo nos vinculamos. En el caso de las poblaciones campesinas indígenas los sujetos no son solo productores agropecuarios,

---

1 Porto Gonçalves, C. W. (2002), Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Instituto Venezolano de Ciencia y Tecnología. Caracas, Venezuela.

sino comunidades en lucha por su territorio, por el agua y por mejores condiciones de vida en general. Por lo tanto, es necesario que pensemos la lucha por la soberanía alimentaria de manera integral, dando lugar a los protagonistas para que diseñen sus propios programas agrícolas y hortícolas de acuerdo a sus necesidades.